

1-Antecedentes de la Guerra civil

La guerra civil comenzó con un golpe de Estado contra el orden constitucional y democrático de la II República. Era un conflicto localizado en el sur de Europa, uno de los muchos golpes militares que se habían producido desde el siglo XIX. Ese golpe militar a la vieja usanza, que no triunfó ni fracasó en los primeros días, se convirtió en guerra, una guerra pueblerina en un primer momento, en la que las fuerzas de ambos contendientes estaban más o menos equilibradas y en una guerra cosmopolita, de dimensiones internacionales más tarde, por la intervención de potencias extranjeras en el conflicto. Una guerra desigual por el desigual apoyo de las potencias extranjeras, en la que un bando carecía de recursos bélicos o estos eran obsoletos, por la inhibición de las potencias democráticas, y el otro no tenía ninguna limitación de armas, tecnológicamente más avanzadas, ni de apoyos logísticos. Una guerra en la que uno de los bandos sobresalía por su disciplina y liderazgo y el otro sufría las consecuencias de las disensiones políticas de los grupos gubernamentales. Pero una guerra en la que la violencia que ejercían ambos contendientes asustaba a propios y a extraños. Con su claridad de juicio, Azaña ya señalaba en Febrero de 1939, *“El Presidente considera que por orden de importancia, los enemigos del Gobierno republicano han sido cuatro. Primero, la Gran Bretaña (por su adhesión al embargo de armas prescrito por la política colectiva de No Intervención); segundo, las disensiones políticas de los mismos grupos gubernamentales que provocaron una anarquía perniciosa que fue total para las operaciones militares de Italia y Alemania a favor de los rebeldes; tercero, la intervención armada italo-germana; y cuarto, Franco”* (Enrique Moradiellos, 1936, Los mitos de la guerra civil, pág.93)

A principios de los años treinta España era un país eminentemente rural, con una agricultura poco evolucionada, con una propiedad de la tierra profundamente desequilibrada, en manos de una oligarquía latifundista y una deficiente presencia

de una burguesía que por una serie de circunstancias no había podido llevar a cabo su revolución burguesa. Destacaban la debilidad de la autoridad civil y la presencia en el escenario político de un pretorianismo militar y eran patentes el enfrentamiento religioso cultural entre el clericalismo y el anticlericalismo, los desafíos nacionalistas y regionalistas a un Estado centralista y el desigual desarrollo industrial que provocaba un desequilibrio y una tensión entre el centro y la periferia.

El impacto de la crisis de 1929 se sumó al confusionismo del marco jurídico constitucional vigente, a la desmedida fragmentación y polarización del sistema político, a las fracturas políticas e ideológicas de las fuerzas armadas, a la escisión obrera entre revolucionarios y reformistas y a la irremediable quiebra de las clases medias en función de las lealtades religiosas (católicas o anticlericales) o nacionales (españolas, catalanas, vascas).

La República había heredado graves problemas sociales, regionales y religiosos, pero eso no la llevaba irremediablemente a la contienda. Intentó firmemente encontrar una solución a esos problemas de una manera democrática, pero los errores de esa práctica política y sobre todo la resistencia a la propia política generarían conflictos.

En el epicentro del conflicto se situaba la violencia, más bien, la ideología de la violencia, latente en el país mucho antes de la II República, pero que ahora era innegable. Porque es a través de esa violencia como se pretendían alcanzar los objetivos, bien fuera construir el nuevo mundo revolucionario, bien fuera restituir el mundo pretérito de la reacción. A muy poca gente le parecía extraño conseguir esos objetivos a través de la fuerza, y a quienes se lo parecía fueron inmediatamente rebasados.

La conversión de esa ideología violenta en guerra civil tuvo bastante que ver, ya lo veremos, con la existencia de profundas divisiones en la sociedad que permitieron a cada bando lograr un amplio consenso popular.

Desde el siglo XIX en España se producía una compleja división del país en dos bloques sociales, totalmente contrarios, las fuerzas de la reforma y las de la reacción.

Los intentos de reformas, fundamentalmente agrarias, y en suma, los propósitos de redistribución de la riqueza, chocaban con los intereses de quienes deseaban que se mantuviera la tradicional desigualdad en la posesión del poder económico y social. El ejército se constituyó en árbitro y gestor de esas contiendas.

La llegada de la II República significó una amenaza para los sectores más privilegiados de la sociedad, pero también una esperanza para los más humildes. Y en esa confrontación entre el miedo y la expectación se movió el nuevo régimen político.

La coalición de las clases media y obrera que accedía al poder se identificaban a sí mismos con la nación española, creyendo que lo que quedaba fuera de ellos era un residuo de la vieja sociedad que iría desapareciendo con el tiempo. Nunca pensaron en su ingenuidad que sus reformas podrían ser cuestionadas ni que el rechazo que producirían tendría el alcance que tuvo.

En un claro intento de modernizar el país y en un plazo muy breve de tiempo, el gobierno republicano se propuso llevar a cabo un programa de gobierno que afectara a todos los ámbitos de la vida social y política de España, sin tomar en consideración las renuencias que hallaría, las tensiones que se provocarían en el seno de la coalición gubernamental y las decepciones que fructificarían en quienes poseían utópicas esperanzas.

En aquel momento se identificaban República y democracia pero cuando triunfó la reacción y las reformas fueron obstaculizadas, la democracia perdió sus apoyos, extendiéndose entre las clases trabajadoras rurales y urbanas la tercera vía, la revolución. Esa tercera vía que existía en toda Europa en el periodo de entreguerras y que al manifestarse como alternativa revolucionaria, desencadenó claramente la determinación derechista de desestabilizar la República.

Así fueron evidentes tres núcleos de proyectos políticos muy diferentes y antagónicos, el reformista democrático, el reaccionario autoritario y el revolucionario colectivizador, lo que algún historiador ha denominado “las tres erres” políticas, Reforma, Reacción o Revolución.

El modelo reaccionario autoritario se habría articulado en torno a la dictadura de Primo de Rivera; el reformista democrático habría surgido en la misma época,

fruto de la colaboración entre el republicanismo burgués y el movimiento obrero socialista junto con el nacionalismo, y el modelo revolucionario se aglutinaría en torno al anarco-sindicalismo más que al comunismo que era entonces una minoría.

En 1931 el proyecto reformista pudo tratar de acometer su amplísimo programa de reformas institucionales y sociales de carácter democrático, pero a medida que impulsaba esas reformas se resquebrajaba la alianza republicano socialista y se debilitaba el propio proyecto reformista.

Bien pronto se pusieron de manifiesto las diferencias entre los republicanos, sobre todo a partir de la elaboración del texto de la Constitución, que originaron la salida del gobierno de Alcalá Zamora y de los republicanos radicales. Privados del ala más conservadora, los republicanos de izquierda gobernaron junto con los socialistas y desde diciembre de 1931 a septiembre de 1933 el gobierno presidido por Azaña acometió una serie de reformas estructurales de orden institucional y social.

En el plano institucional se abogó por la plena secularización a través de la rigurosa separación entre la Iglesia y el Estado, se quiso consolidar la primacía del poder civil a través de una reforma del Ejército y se pretendió modificar la estructura centralista del Estado a través de Estatutos.

En el campo social se acometieron medidas de gran alcance, leyes de protección obrera, salario mínimo, divorcio, coeducación de sexos, pero sobre todo la reforma agraria, que se convertiría en la pieza angular de la modernización del país.

Ciertamente la reforma agraria se convirtió en un símbolo de cambio, pero también de la resistencia de las clases dominantes frente al gobierno; por si fuera poco cuando se proclamó no satisfizo a nadie; los sindicatos y partidos obreros la consideraban insuficiente, mientras que los grupos patronales y los partidos de la derecha la veían absolutamente revolucionaria. Llegaba tarde y no contentaba a nadie; los propietarios se resistieron a su aplicación, recurriendo a todo tipo de estrategias y esa dilación y resistencia irritó a un campesinado que se encontraba cada vez más radicalizado y sufría en mayor medida los efectos del paro.

A mediados de 1933 empezaron a notarse los efectos de la crisis económica, se frenó el impulso reformador y se extendió el paro, sobre todo entre los jornaleros, incrementándose las militancias sindicales.

El Gobierno sufría un considerable desgaste pues coincidían en el tiempo la insurrección revolucionaria anarquista y la labor de resistencia parlamentaria de conservadores y reaccionarios.

La CNT tenía gran implantación en el campo andaluz y en la industria catalana; regida por la FAI, con una clara estrategia insurgente, participaba en innumerables huelgas y conflictos armados, como el PCE, un partido minoritario. No obtenían grandes resultados pero contribuían a la identificación por parte de la derecha de la República con la subversión.

La CEDA agrupaba a las masas católicas. Su líder, Gil Robles, se declaraba accidentalista respecto a la forma de gobierno y dispuesto a participar en las elecciones para alcanzar el poder y reformar la Constitución. Sus objetivos eran el mantenimiento del orden social, el respeto a la propiedad privada y la salvaguarda de los derechos de la religión católica.

Los catastrofistas se oponían a la República y pensaban que debían derrocarla mediante un golpe de Estado. Existían tres organizaciones catastrofistas, los carlistas, con la Comunión Tradicionalista; los alfonsinos, con Renovación Española y Falange, creada por Jose Antonio. Siguiendo estas premisas el 10 de agosto de 1932 Sanjurjo se levantaba en Sevilla, en un golpe de Estado mal planeado que sería fácilmente derrotado.

En las elecciones de 1933 se dieron cita varias circunstancias, la presentación de candidaturas independientes de los republicanos de izquierda y de los socialistas, la formación de un único frente antimarxista y antirrevolucionario por parte de la CEDA y la participación en solitario del republicanismo conservador de Lerroux.

La violencia retórica en los mítines preelectorales era palpable. A las palabras de Gil Robles: *“Debemos fundar un nuevo Estado, una nación nueva (...) ¡qué importa si tenemos que derramar sangre!(...)Llegado el momento, el Parlamento, o se somete, o le hacemos desaparecer”*, se oponían las palabras de Largo :*”Sólo la dictadura del proletariado podrá llevar a cabo el imprescindible desarme*

económico de la burguesía". Palabras provocadoras en ambos casos que servían para que unos y otros justificaran sus posturas.

El desmoronamiento de los republicanos de izquierda y de los socialistas fue evidente; se alzaron con el triunfo la CEDA y el republicanismo lerrouxista.

Aunque la CEDA había obtenido el mayor número de votos, se entregó el Gobierno a Lerroux y bien pronto se observó que la derecha estaba dispuesta a dismantelar toda la política reformista del bienio anterior.

La colaboración entre la CEDA y el lerrouxismo estimuló la progresiva radicalización de un sector socialista liderado por Largo .Una radicalización que dañó profundamente al Partido Socialista porque sentó las bases de una división interna entre los radicales y los moderados, liderados por Prieto, al tiempo que dificultó la recomposición de la conjunción republicano-socialista para retomar el poder por la vía electoral.

A lo largo de 1934 la tensión política fue aumentando y se sucedían las huelgas promovidas por los cenetistas y los desórdenes callejeros entre elementos derechistas e izquierdistas, en una espiral de violencia que nadie se encargaba de frenar sino más bien de impulsar. La violencia que se respiraba en las calles y en los campos se trasladó al Parlamento al tiempo que las organizaciones de derechas e izquierdas hacían acopio de armas. Desde 1932 se leían en los periódicos anuncios como "Bajaron las pistolas" y militantes de ambas tendencias desfilaban uniformados con sus atavíos paramilitares.

En Octubre de 1934 se desencadenó una crisis que tendría serias repercusiones más adelante. Gil Robles exigió que la CEDA fuera algo más que un apoyo parlamentario y reclamó la presencia del partido en el gabinete.

El Partido Socialista había advertido que si esto se producía estaba dispuesto a desencadenar la revolución, de manera que el 5 de Octubre comenzaba una huelga general indefinida, al tiempo que Companys proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal. Los republicanos de izquierda se negaron a participar en lo que podría convertirse en un aplastamiento violento del orden legal establecido.

Ambos acontecimientos fueron un fracaso, tan sólo en Asturias se produjo un estallido de guerra social que duró quince días y fue sofocada por Francisco Franco .La revolución de Asturias aportó varias lecciones; a los mineros les mostró el camino que debían emprender para barrer a “los enemigos de clase” ,a los conservadores les abrumó la violencia obrera y les alertó acerca de la lealtad de los nacionalistas, y a los futuros golpistas les enseñó cómo a través de la violencia extrema se disolvían revoluciones y se tomaba el poder. Los hechos de Octubre pusieron de manifiesto el creciente alejamiento de la clase obrera y de los sectores liberales y nacionalistas de las clases medias con respecto a la República, pero también mostraron cómo esos sectores no poseían un proyecto social y político si no común, que al menos pudiera articularse en una estrategia común.

Los anarcosindicalistas desconfiaban no sólo de los políticos de la Generalitat sino también de los socialistas y excepto en Asturias se mantuvieron al margen. Los socialistas habían organizado la revolución por sí mismos, no en vano habían hecho acopio de armas, pero habían rechazado cualquier posibilidad de pacto con los sectores republicanos de izquierda y con los republicanos catalanes. La izquierda republicana había quedado aislada, sin conexión ni con los socialistas ni con la izquierda catalana, que actuó por su cuenta, sabiendo que la CNT no seguiría ningún movimiento dirigido por partidos políticos.

Los sucesos de Octubre contribuyeron a la crisis de poder que junto con la crisis económica fueron determinantes para el destino de la República. Cada vez era más evidente la debilidad del Partido Radical y el ascenso de la CEDA y que en la medida que crecía el poder de la CEDA aumentaba su derechización

Durante 1935 se acentuó el proceso de polarización de la sociedad, en parte por la anulación de las reformas políticas y por la persecución de los implicados en la revolución de Octubre. La derecha pedía cabezas, sobre todo apetecía la de Azaña, que no había participado en los hechos.

El reformismo político vio cómo se reducían sus apoyos sociales y políticos. El miedo a la reacción inclinó a algunos a la cooperación con los socialistas, mientras que aquellos que temblaban ante la posibilidad de una revolución se

volcaron en la colaboración con la CEDA, creyendo que con ello lograrían una estabilidad y superarían la crisis institucional.

Es por esto que en las elecciones de Febrero de 1936 los republicanos de izquierda formaron parte del Frente Popular junto con los socialistas y comunistas, mientras que los republicanos radicales y conservadores participaron en coaliciones derechistas moduladas por la CEDA y en la que también aparecían monárquicos, carlistas y falangistas.

La victoria del Frente Popular sería un momento decisivo en el curso de los acontecimientos. La alternativa accidentalista sería desplazada por la opción catastrofista y comenzó la conspiración militar. Gil Robles ya no podía aportar soluciones a la derecha, y se volvió la mirada hacia Calvo Sotelo.

En la primavera de 1936 la tónica predominante fue el desorden social; se sucedieron los cierres patronales y los enfrentamientos entre obreros y patronos se unieron a actos vandálicos. La violencia iba subiendo de tono, ya no era exclusivamente verbal ni se proferían tan sólo amenazas. Y el Gobierno del Frente Popular era incapaz de atajarla.

Los republicanos de izquierda trataron de que los socialistas colaboraran en las tareas de gobierno y fueron palpables las divergencias en el seno del Partido Socialista. Mientras que Prieto promovía la colaboración con los republicanos de izquierda, Largo Caballero se envolvía en su tela de araña revolucionaria. No sólo ocurría que Largo se había creído el papel de Lenin español que la prensa le había otorgado, sino que también temía que el ejercicio del gobierno cobrara un precio al movimiento sindical que él dirigía y que el proletariado pudiera inclinarse hacia el anarcosindicalismo. Cuando Azaña y Prieto maniobraron para desplazar a Alcalá Zamora de la Presidencia de la República, Largo no aceptó que Prieto presidiera el gobierno de una República burguesa.

En este punto coincidieron tres aspectos que tendrían una total trascendencia. Azaña regresaba como Presidente de la República, para terror de quienes temían las reformas; la fractura que se había producido en el seno del socialismo se arrastraría ya para siempre y pasaría factura al país. Pero quizás no fuera menos importante la llegada al poder de Casares Quiroga, débil cuando no

imprudentemente optimista. La lucidez de Prieto, su habilidad para las maniobras políticas tal vez hubieran sido más oportunas para los tiempos que vinieron a continuación.

Gil Robles ya no servía para los propósitos de la derecha, que volvió los ojos hacia Calvo Sotelo, dueño de un discurso exaltado, que se combinaba con la acción de la Falange en la calle, una Falange que cada vez tenía más seguidores, a costa de las Juventudes cedistas.

Mientras que las juventudes de izquierdas y de derechas se enfrentaban abiertamente en las calles y era cada vez más frecuente la presencia de automóviles desde los que se disparaba a los transeúntes, con la consecuente alarma social, los conspiradores se consagraban a diseñar su estrategia y a tratar de obtener apoyos. También se fusionaban las Juventudes socialistas y comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas que pronto caerían dentro de la órbita comunista.

Bombas, asesinatos, furibundos discursos en las Cortes a cargo de Dolores Ibárruri y de Calvo Sotelo proporcionaron al ejército una teoría de la acción política y a las masas derechistas el convencimiento de que la República se identificaba con el comunismo y el separatismo.

La CNT promovía continuas huelgas y esperaba el momento de poner en práctica su modelo revolucionario, al tiempo que la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra se imbuía de la retórica revolucionaria largocaballerista.

El desorden social, provocado por la oposición ya sin ambages entre el modelo revolucionario y contrarrevolucionario y el temor al separatismo llevaron a una parte del ejército a la convicción de lo que ya estaban convencidos de antemano, de la necesidad, perentoriedad y legitimidad de dar un brusco giro a la historia de España.